

AGUA, GESTIÓN Y DINERO

GERMÀ BEL

(Publicado en *La Vanguardia*, 28 de febrero de 2012)

Días ricos en asuntos económicos estos últimos. Por ejemplo, el asunto de EuroVegas, sobre el que me parecen muy razonables las posiciones del Govern de la Generalitat, así como de los alcaldes metropolitanos que se han pronunciado. O los cambios en los organismos reguladores españoles, que provocarán la disminución de rango de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, cuya sede fue trasladada a Barcelona a mediados de la década pasada. Mi opinión sobre este desenlace ya fue publicada en estas páginas el 28 de mayo de 2004 (“¿Qué sede en Barcelona?”), antes de que el traslado de la CMT fuese aprobado y puesto en práctica; no es necesario reiterarla ahora.

Otra asunto de gran relevancia, y éste sí situado dentro de la capacidad de decidir de las instituciones catalanas, es la posible privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), empresa pública de la Generalitat que actúa en el ciclo de suministro del agua. La situación financiera de ATLL está lastrada por la gran deuda acumulada, como la de la Agència Catalana del Agua. La privatización puede parecer tentadora al gobierno catalán, aunque hay algunas reflexiones que debería ponderar antes de tomar decisiones definitivas.

Como se ha comentado ya en otras ocasiones, en servicios como el suministro de agua, con características de monopolio natural, no hay diferencias sistemáticas de costes entre gestión pública y privada. Si acaso, las tarifas pueden ser algo más altas con gestión privada, porque la recuperación de coste por tarifa es mayor, y el subsidio del presupuesto menor. Los gobiernos parecen aprovechar la privatización de la gestión del agua para aumentar la repercusión del coste sobre el usuario. Por otra parte, la privatización en este sector es de las más complejas, por la gran dificultad para conseguir competencia por el contrato, y por la percepción social del agua como servicio público básico. De ahí que es el sector en el que la privatización haya cosechado más fracasos, sobre todo cuando hay problemas de accesibilidad asequible, como en algunos países de América Latina.

En Catalunya existe larga tradición de gestión privada en el servicio urbano del agua. Más del 80% de catalanes reciben su servicio urbano de agua de empresas privadas. Por ello, no creo que la discusión sobre la privatización de ATLL vaya a tener grandes ingredientes ideológicos. En este contexto, hay un aspecto que el gobierno debería considerar dadas las restricciones presupuestarias del momento: el servicio del agua es el menos apropiado para buscar recursos con los que hacer frente a gastos generales. Es bueno recordar la experiencia: las privatizaciones en este sector por motivos fundamentalmente financieros suelen acabar mal. Es bien sabido que los usuarios deberán pagar más en el futuro, pues la acumulación de la deuda lo hace inevitable en la práctica. Esta es la variable financiera relevante en la ecuación del agua en Cataluña, y no si ATLL es pública o privada.